Rosa Díaz reprocha al Gobierno que ignore las peticiones de Protección Civil y critica la congelación de los fondos del Servicio de Emergencias

La diputada del PRC cuestiona que Administración Local destine apenas 400.000 euros a infraestructuras y reclama “plazos y garantías” para cerrar el convenio del personal laboral

Santander, 10 de noviembre de 2026

La diputada y portavoz del PRC en materia de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Rosa Díaz, ha denunciado hoy que los presupuestos de 2027 ignoran las demandas del voluntariado de Protección Civil, congelan los fondos para el Servicio de Emergencias y “siguen sin resolver los conflictos de personal pendientes”, mientras destinan “apenas 400.000 euros” a atender las necesidades de inversión de los municipios.

Durante la comparecencia del consejero del área, Juan Sáez Bereciartu, en la Comisión de Economía del Parlamento, Díaz ha reprochado al Gobierno que no atienda la iniciativa aprobada la semana pasada a instancias de los regionalistas para responder a las necesidades de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de Protección Civil, que reclaman ayudas diferenciadas y recuperar las cantidades del presupuesto de 2023.

En concreto, ha cuestionado que el Gobierno anuncie 590.000 euros para una línea que incluye a Protección Civil, las policías locales y otras actuaciones, sin detallar cuánto corresponde a cada destinatario, por lo que ha pedido explicaciones sobre el reparto y los recursos específicos para formación, coordinación, aseguramiento y funcionamiento ordinario del voluntariado.

“Sus necesidades no pueden resolverse únicamente con convocatorias de ayudas para adquirir vehículos, vestuario o material”, ha advertido, tras recordar su colaboración en la lucha contra incendios, inundaciones, dispositivos preventivos y otras situaciones de emergencia.

La regionalista también ha pedido explicaciones por la reducción del presupuesto de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana un 2,4 por ciento y la dotación

“prácticamente congelada” del Servicio de Emergencias de Cantabria, en torno a los 18,3 millones de euros.

Aunque ha reconocido el incremento que recibió este servicio en 2026 y ha valorado la incorporación anunciada de 35 bomberos, ha advertido de que el Gobierno deberá afrontar en 2027 nuevos compromisos de personal, mayores gastos de funcionamiento y necesidades de inversión. En consecuencia, ha preguntado “qué margen presupuestario real existe para reforzar el servicio una vez atendidos todos esos compromisos”.

Asimismo, ha reclamado plazos de ejecución, financiación efectiva y un calendario de puesta en funcionamiento del nuevo parque de emergencias de Valdáliga y de las mejoras previstas en el resto de los partes.

En materia de personal, Díaz ha instado al Gobierno a concretar cuándo prevé culminar la negociación del IX convenio colectivo del personal laboral y si el millón de euros previsto en las cuentas resulta suficiente para atender las mejoras que están negociando.

“Los trabajadores necesitan certezas, un calendario de negociación, compromisos concretos y garantías de financiación”, ha subrayado, por lo que ha pedido conocer cuándo habrá un acuerdo y cómo se financiará su aplicación.

Respecto a la financiación municipal, ha valorado el aumento del Fondo de Cooperación, que pasa de 19,46 a 20,51 millones de euros, pero ha recordado que esa actualización sólo cumple lo dispuesto en la ley que lo blindó en 2022. “No se puede presentar como una concesión extraordinaria del Partido Popular lo que responde a una política de financiación municipal consolidada y a compromisos previamente asumidos”, ha afirmado.

Además, ha cuestionado que las partidas de la Dirección General de Administración Local para nuevas infraestructuras y reposición de las existentes sumen apenas 400.000 euros, una cantidad que considera “insuficiente para responder a las necesidades de inversión de los municipios de Cantabria”.

Finalmente, Rosa Díaz ha reclamado que la simplificación administrativa se traduzca en mejoras concretas para los ciudadanos y ha preguntado cuántos trámites se han eliminado y cuánto se han reducido los plazos después de más de tres años de legislatura. “La mejor prueba de que una Administración se ha modernizado no es el dinero que gasta en informática, sino el tiempo que ahorra a los ciudadanos”, ha concluido.